



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN TERCERA - SUB SECCIÓN B**

Bogotá D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veinte (2020)

Magistrado Ponente: HENRY ALDEMAR BARRETO MOGOLLÓN

Radicado:	11001 – 33 – 43– 064 – 2020 – 0068 – 01
Accionante:	Mario de Jesús Puerta Urrego
Accionado:	Caja de Sueldos Policía Nacional
Acción:	Tutela
Tema:	Petición
Instancia:	Segunda

Conforme a la constancia secretarial que antecede se procede a resolver el recurso de impugnación presentado por la parte accionante contra la sentencia del diecisiete (17) de marzo de dos mil veinte (2020), proferida por el Juzgado Sesenta y Cuatro (64) Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Tercera, que declaró la carencia actual de objeto por hecho superado.

I. ANTECEDENTES

Mediante escrito presentado el 11 de marzo de 2020, Mario de Jesús Puerta Urrego, por conducto de apoderado, instauró acción de tutela con el fin de solicitar la protección de su derecho fundamental de petición el cual considera vulnerado por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, en atención a la petición elevada el 15 de noviembre de 2019, mediante el cual solicitó reliquidación y reajuste de la asignación de retiro, sin que se haya dado una respuesta a la misma. Para el efecto formuló las siguientes:

1.1. Pretensiones

El accionante concreta la pretensión de amparo en la siguiente forma:

“**4.1.** Tutelar el derecho fundamental al derecho de petición de mi prohijado judicial.

4.2. Ordenar de manera consecuencial al representante legal de la Caja de Sueldos de la Policía Nacional, o a quien haga sus veces, que conteste de fondo el derecho de petición presentado el 15 de noviembre de 2019, que allegue o ponga de presente la respuesta de la totalidad de la solicitud, toda vez que esa información será usada para iniciar un proceso judicial, si es del caso, ante la jurisdicción contenciosa administrativa.

1.2. Hechos

El accionante presentó derecho de petición el 15 de noviembre de 2019, bajo el radicado No. 20192-3-19591712 Id. 515190 ante el Director General de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, Brigadier General Jorge Alirio Barón Leguizamón, en el que solicitó:

“1.1. Que se haga extensiva al agente ® **Mario de Jesús Puerta Urrego**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.232.447 expedida en la ciudad de Medellín (Antioquia), quien por resolución expedida por esa entidad, cuenta con asignación de retiro, la sentencia proferida por el Honorable Consejo de Estado, sección segunda, de fecha 17 de mayo de 2007, dentro del expediente con el radicado No. 25000-23-25-000-2003-08152-01 con número interno 8464-05, en donde fue ponente el doctor Jaime Moreno García, en el que fue demandante el señor José Jaime Tirado Castañeda y demandada la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -CASUR, providencia que sentó un precedente jurisprudencial y a la que el Consejo de Estado le dio alcance de sentencia de unificación.

1.2. Solicito que la Caja ordene y realice, como consecuencia de la anterior petición, la reliquidación y el reajuste de la asignación de retiro del agente ® **Mario de Jesús Puerta Urrego** reconocida mediante resolución expedida por dicha entidad, adicionándole los porcentajes correspondientes a la diferencia existente entre el porcentaje en que fue aumentada la pensión, en aplicación de la escala gradual salarial porcentual y el índice de precios al consumidor (IPC) que se aplicó para los reajustes pensionales , con

fundamento en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, en los años **1997, 1999, 2002.**

1.3. Solicito que el reajuste de la asignación de retiro se haga año por año, desde el año de 1997 y hasta la fecha, con los nuevos valores que arroje la reliquidación solicitada en el numeral anterior.

1.4. El pago que arroje el reajuste y la reliquidación se hará en efectivo, indexado, correspondiente a la diferencia que resulte entre la liquidación solicitada y las sumas canceladas por concepto de asignación de retiro desde el año 1997 y hasta la fecha en que sea reconocido el derecho solicitado en este escrito.

1.5. De negarse, pro parte del Despacho, las peticiones que acabo de elevar, solicito que en el acto en que las niegue se citen las normas en la que se sustenta la decisión, para que no se incurra en una vía de hecho en la respuesta al derecho de petición.

1.6. Solicito, de manera respetuosa, que las sumas que se le vayan a cancelar a mi poderdante, sean consignadas a la cuenta de ahorros número 632000295, que la empresa, para la cual trabajo, tiene en el Banco AVVillas, perteneciente a la sociedad jurídica Restrepo Isaza Abogados, Consultores y Profesionales Asociados S.A.S., con el NIT. 901277703-7”

Señala que a la fecha, la accionada no ha dado respuesta a la solicitud elevada.

1.3. Del informe de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

La Oficina Asesora Jurídica de la entidad, rindió el informe requerido, manifestando que mediante oficio No. ID552910 de 16 de marzo de 2020 se brindó respuesta al accionante en donde se comunicó lo siguiente:

“(…) En atención al radicado del asunto, me permito informar que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR) podrá dar aplicación, según corresponda, a la figura de Extensión de la Jurisprudencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, de fecha 17 de mayo de 2007, número 25000-23-25-000-2003-8152-01 (8464-05) a quienes lo soliciten y acrediten los mismos supuestos fácticos y jurídicos del derecho reconocido. Lo anterior de conformidad con lo estipulado en los artículos 10, 102, 269 de la Ley 1437 del 2011 y la Circular 002 del 17-07-2017 de la Agencia

Nacional de Defensa Jurídica del Estado, situación administrativa que frente al señor MARIO DE JESÚS PUERTA URREGO, será evaluada, siempre y cuando la petición de extensión de los mencionados efectos, sea elevada por el Titular del Derecho, o por conducto de su Apoderado Judicial debidamente acreditado, requisito sine qua non del que carece su escrito radicado bajo el ID No. 515190 del 25-11-2019, toda vez que el poder principal aportado por la firma “*Restrepo Isaza abogado*” corresponde al otorgado por quien dice llamarse “HECTOR FIDEL RAMOS HERRERA” persona que difiere del mencionado en su escrito petitorio y del cual a usted como profesional del derecho le sustituyeron el respectivo poder. En este orden, se evidencia falta de legitimidad para actuar en representación del señor MARIO DE JESÚS PUERTA URREGO, circunstancia que impide a la entidad adelantar el trámite que en debido proceso corresponda. Finalmente, es del resorte indicar que el artículo 269 de la Ley 1437 de 2011, estipula que si se niega la extensión de los efectos de una Sentencia de Unificación, o la entidad hubiere guardado silencio en los términos del artículo 102 ibídem, el interesado podrá acudir ante el Consejo de Estado mediante escrito razonado, al que acompaña la copia de la actuación surtida ante la autoridad competente, no obstante tenga en cuenta que de igual manera el Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo, exigirá para actuar en representación del titular de la prestación, ejercer el derecho de postulación otorgado en debida forma. (...)”

Respuesta que fue remitida al correo electrónico Restrepoisaza.abogados@gmail.com, entregado a la estafeta de la entidad para ser radicado directamente en la dirección de notificaciones.

En consecuencia con lo anterior, solicita declarar la improcedencia de la acción, en tanto se brindó respuesta a la parte actora mediante oficio No. ID552910 de 16 de marzo de 2020.

1.4. De la sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 17 de marzo de 2020, proferida por el Juzgado Sesenta y Cuatro (64) Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, declaró la carencia actual de objeto por hecho superado. Al respecto, manifestó el *a quo* que en razón a las pruebas aportadas, se evidencia que la entidad, mediante oficio No. ID552910 de 16 de marzo de

2020 dio respuesta a la solicitud elevada por la parte actora, en el que manifestó que su solicitud de extensión de la jurisprudencia sería evaluada, no obstante, dicho trámite no pudo ser efectuado, en tanto el abogado que realizó la reclamación, carecía de legitimación en la causa, en consecuencia, con la respuesta dada por la entidad desaparecieron los hechos que dieron origen a la presente acción constitucional.

1.5. Del trámite de la impugnación

Una vez notificadas las partes del fallo del 17 de marzo de 2020, en la misma fecha la parte actora presentó impugnación contra la providencia en mención y mediante auto de 24 de marzo de 2020, fue concedido ante esta Corporación. Una vez realizado el reparto de la acción de tutela, el proceso fue asignado al Despacho de que es titular el Magistrado Ponente y al no estimarse necesaria la práctica de pruebas adicionales o presentación de informes procede la sala a decidir el recurso en mención.

1.6. De la impugnación

Inconforme con la decisión adoptada en primera instancia, la parte actora impugnó al decisión, solicitando revocar el fallo de primera instancia y amparar el derecho de petición, Aduce el apoderado del actor que la accionada efectuó un “cambiazó” de poderes dentro de carpetas referentes a la presentación de derechos de petición con el mismo contenido, reconocimiento y pago de IPC con asignación de retiro, afirmación que señala el apoderado en razón a que el mismo día, 25 de noviembre de 2019, se radicaron dos derechos de petición a nombre de los señores Héctor Fidel Ramos Herrera y Mario de Jesús Puerta Urrego.

Indica que de manera tardía dieron respuesta la apetición del señor Hector Fidel Ramos Herrera, argumentado como negativa a su petición que en ocasión anterior le habían reconocido el IPC.

Nunca en el escrito referido adujeron la ausencia de poder o el hecho de que en dicha carpeta hubiese un poder otorgado por otra persona.

El apoderado del accionante se desplazó el día 16 de marzo a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional y allí solicitó la verificación de las dos carpetas evidenciándose que el poder otorgado por el señor Mario de Jesús Puerta Urrego, reposaba en la carpeta del señor Héctor Fidel Ramos Herrera y a su vez, el poder otorgado por el señor Héctor Fidel Ramos Herrera, reposaba en la carpeta del señor Mario de Jesús Puerta Urrego. En vista de lo anterior, el abogado apoderado solicitó una explicación al respecto y en donde le indicaron que aparentemente dicha situación se presentó al momento de escanear los documentos. Ante lo anterior, el apoderado solicitó corregir dicha situación, sin embargo la accionada manifestó la existencia de una decisión al respecto, frente a la cual no se admite recurso legal.

Cuestiona el apoderado la tardanza de más de cuatro meses de la accionada para dar una contestación que no requería mayor grado de estudio y observación si era evidente la inexistencia de poder.

Por lo anterior, solicita la parte actora no tener por contestado el derecho de petición y en consecuencia se ordene a la accionada dar respuesta al mismo.

1.7. Medios de prueba

Se encuentran como medios de prueba los siguientes:

1.7.1. Parte accionante

- Derecho de petición el 15 de noviembre de 2019, bajo el radicado No. 20192-3-19591712 Id. 515190 ante el Director General de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, Brigadier General Jorge Alirio Barón Leguizamón, en el que solicitó:

“1.1. Que se haga extensiva al agente ® **Mario de Jesús Puerta Urrego**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.232.447 expedida en la ciudad de Medellín (Antioquia), quien por resolución expedida por esa entidad, cuenta con asignación de

retiro, la sentencia proferida por el Honorable Consejo de Estado, sección segunda, de fecha 17 de mayo de 2007, dentro del expediente con el radicado No. 25000-23-25-000-2003-08152-01 con número interno 8464-05, en donde fue ponente el doctor Jaime Moreno García, en el que fue demandante el señor José Jaime Tirado Castañeda y demandada la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -CASUR, providencia que sentó un precedente jurisprudencial y a la que el Consejo de Estado le dio alcance de sentencia de unificación.

1.2. Solicito que la Caja ordene y realice, como consecuencia de la anterior petición, la reliquidación y el reajuste de la asignación de retiro del agente ® **Mario de Jesús Puerta Urrego** reconocida mediante resolución expedida por dicha entidad, adicionándole los porcentajes correspondientes a la diferencia existente entre el porcentaje en que fue aumentada la pensión, en aplicación de la escala gradual salarial porcentual y el índice de precios al consumidor (IPC) que se aplicó para los reajustes pensionales , con fundamento en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, en los años **1997, 1999, 2002**.

1.3. Solicito que el reajuste de la asignación de retiro se haga año por año, desde el año de 1997 y hasta la fecha, con los nuevos valores que arroje la reliquidación solicitada en el numeral anterior.

1.4. El pago que arroje el reajuste y la reliquidación se hará en efectivo, indexado, correspondiente a la diferencia que resulte entre la liquidación solicitada y las sumas canceladas por concepto de asignación de retiro desde el año 1997 y hasta la fecha en que sea reconocido el derecho solicitado en este escrito.

1.5. De negarse, pro parte del Despacho, las peticiones que acabo de elevar, solicito que en el acto en que las niegue se citen las normas en la que se sustenta la decisión, para que no se incurra en una vía de hecho en la respuesta al derecho de petición.

1.6. Solicito, de manera respetuosa, que las sumas que se le vayan a cancelar a mi poderdante, sean consignadas a la cuenta de ahorros número 632000295, que la empresa, para la cual trabajo, tiene en el Banco AVVillas, perteneciente a la sociedad jurídica Restrepo Isaza Abogados, Consultores y Profesionales Asociados S.A.S., con el NIT. 901277703-7”.

- Poder otorgado por Mario de Jesús Puerta Urrego, a los abogados José Bernardo Restrepo Noriega como apoderado principal y John Fernando Calderón Gaitán como apoderado sustituto.

- Respuesta dada por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional a la petición elevada por el apoderado del señor Héctor Fidel Ramos Herrera, Radicado No. 518399 de 2 de diciembre de 2019, mediante el cual solicita aplicar efectos extensión de jurisprudencia, solicitud negada por la accionada en razón a que el señor Ramos Herrera no cumple con los requisitos del artículo 102 de la Ley 1437 de 2011 y de la Circular 002 del 17 -07-2017 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, mencionando que al peticionario le fue reconocida reajuste de asignación mensual de retiro.
- Respuesta dada por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional a la petición elevada por el apoderado del señor Mario de Jesús Puerta Urrego, Radicado No. 5552910, del 15 de marzo de 2020, en respuesta a la petición el 25 de noviembre de 2019.

1.7.2. Parte accionada

- Oficio No. ID552910 de 16 de marzo de 2020 mediante el cual la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional por conducto del a Jefe Oficina Asesora Jurídica brindó respuesta al accionante en donde se comunicó lo siguiente:

“(…) En atención al radicado del asunto, me permito informar que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR) podrá dar aplicación, según corresponda, a la figura de Extensión de la Jurisprudencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, de fecha 17 de mayo de 2007, número 25000-23-25-000-2003-8152-01 (8464-05) a quienes lo soliciten y acrediten los mismos supuestos fácticos y jurídicos del derecho reconocido. Lo anterior de conformidad con lo estipulado en los artículos 10, 102, 269 de la Ley 1437 del 2011 y la Circular 002 del 17-07-2017 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, situación administrativa que frente al señor MARIO DE JESÚS PUERTA URREGO, será evaluada, siempre y cuando la petición de extensión de los mencionados efectos, sea elevada por el Titular del Derecho, o por conducto de su Apoderado Judicial debidamente acreditado, requisito sine qua non del que carece su escrito radicado bajo el ID No. 515190 del 25-11-2019, toda vez que el poder principal

aportado por la firma “*Restrepo Isaza abogado*” corresponde al otorgado por quien dice llamarse “HECTOR FIDEL RAMOS HERRERA” persona que difiere del mencionado en su escrito petitorio y del cual a usted como profesional del derecho le sustituyeron el respectivo poder. En este orden, se evidencia falta de legitimidad para actuar en representación del señor MARIO DE JESÚS PUERTA URREGO, circunstancia que impide a la entidad adelantar el trámite que en debido proceso corresponda. Finalmente, es del resorte indicar que el artículo 269 de la Ley 1437 de 2011, estipula que si se niega la extensión de los efectos de una Sentencia de Unificación, o la entidad hubiere guardado silencio en los términos del artículo 102 ibídem, el interesado podrá acudir ante el Consejo de Estado mediante escrito razonado, al que acompaña la copia de la actuación surtida ante la autoridad competente, no obstante tenga en cuenta que de igual manera el Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo, exigirá para actuar en representación del titular de la prestación, ejercer el derecho de postulación otorgado en debida forma. (...)”

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la impugnación al fallo 17 de marzo de 2020, proferida por el Juzgado 64 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Tercera, dentro de la acción de tutela de la referencia, en tanto el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 “*Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política*”¹, establece que la impugnación de los fallos de tutela serán conocidos por el superior jerárquico del *a-quo*, el cual por tratarse de un Juez Administrativo del Circuito de Bogotá, corresponde al Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

¹ “Artículo 32. Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente (...)”

2.2. Legitimación de las partes

2.2.1. Parte accionante

El artículo 10 del Decreto 2591 de 1995² establece que la acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar por cualquier persona vulnerada o amenazada en sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de abogado. Teniendo en cuenta que la presente acción constitucional fue presentada por conducto del apoderado de Mario de Jesús Puerta Urrego, quien considera vulnerado su derecho fundamental de petición, en razón a la petición elevada el 25 de noviembre de 2019, mediante el cual solicitó la reliquidación y reajuste de la asignación de retiro, petición que según la parte actora, no ha sido resuelta por la parte accionada.

2.2.2. Parte accionada

Se encuentra legitimado en la causa por pasiva la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, en virtud de que se le atribuye la presunta vulneración del derecho fundamental de petición del que es titular Mario de Jesús Puerta Urrego.

3. Problema Jurídico.

Corresponde a la Sala establecer si en la presente acción constitucional la la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional vulneró el derecho fundamental de petición del accionante en atención a la petición elevada el 25 de noviembre, bajo el radicado No. 20192-3-19591712 Id. 515190 mediante el cual solicitó la reliquidación y reajuste de la asignación de retiro,

² “Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.”

relacionada 8 de octubre de 2019 bajo el radicado No. 20193210802082, petición que según el accionante, no ha sido resuelta.

4. Tesis de la Sala

De conformidad con las pruebas obrantes en el expediente se advierte que si bien es cierto la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, mediante Radicado No. 5552910, del 15 de marzo de 2020 se pronunció a frente a la solicitud elevada por el actor, también lo es, que su respuesta no resolvió lo solicitado por el actor, razón por la cual, a criterio de la Sala se está ante una violación al núcleo esencial del derecho de petición del accionante, pues a la fecha no se ha emitido respuesta de fondo a la solicitud elevada por el actor, relacionada con la reliquidación y reajuste de la asignación de retiro, a pesar de que ya feneció el término que tenía la entidad para proferirla.

5. Hechos probados

Se encuentra acreditado que Mario de Jesús Puerta Urrego, mediante apoderado presentó derecho de petición el 15 de noviembre de 2019, bajo el radicado No. 20192-3-19591712 Id. 515190 ante el Director General de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, Brigadier General Jorge Alirio Barón Leguizamón, en el que solicitó la extensión de jurisprudencia de fecha 17 de mayo de 2007, dentro del expediente con el radicado No. 25000-23-25-000-2003-08152-01, en consecuencia se efectuara reliquidación y reajuste de asignación de retiro.

En razón a la petición elevada por la parte actora, se encuentra que mediante Oficio No. ID552910 de 16 de marzo de 2020, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional por conducto de la Jefe Oficina Asesora Jurídica brindó respuesta al accionante en donde se comunicó lo siguiente:

“(…) En atención al radicado del asunto, me permito informar que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR) podrá dar aplicación, según corresponda, a la figura de Extensión de la

Jurisprudencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, de fecha 17 de mayo de 2007, número 25000-23-25-000-2003-8152-01 (8464-05) a quienes lo soliciten y acrediten los mismos supuestos fácticos y jurídicos del derecho reconocido. Lo anterior de conformidad con lo estipulado en los artículos 10, 102, 269 de la Ley 1437 del 2011 y la Circular 002 del 17-07-2017 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, situación administrativa que frente al señor MARIO DE JESÚS PUERTA URREGO, será evaluada, siempre y cuando la petición de extensión de los mencionados efectos, sea elevada por el Titular del Derecho, o por conducto de su Apoderado Judicial debidamente acreditado, requisito sine qua non del que carece su escrito radicado bajo el ID No. 515190 del 25-11-2019, toda vez que el poder principal aportado por la firma “*Restrepo Isaza abogado*” corresponde al otorgado por quien dice llamarse “HECTOR FIDEL RAMOS HERRERA” persona que difiere del mencionado en su escrito petitorio y del cual a usted como profesional del derecho le sustituyeron el respectivo poder. En este orden, se evidencia falta de legitimidad para actuar en representación del señor MARIO DE JESÚS PUERTA URREGO, circunstancia que impide a la entidad adelantar el trámite que en debido proceso corresponda. Finalmente, es del resorte indicar que el artículo 269 de la Ley 1437 de 2011, estipula que si se niega la extensión de los efectos de una Sentencia de Unificación, o la entidad hubiere guardado silencio en los términos del artículo 102 ibídem, el interesado podrá acudir ante el Consejo de Estado mediante escrito razonado, al que acompaña la copia de la actuación surtida ante la autoridad competente, no obstante tenga en cuenta que de igual manera el Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo, exigirá para actuar en representación del titular de la prestación, ejercer el derecho de postulación otorgado en debida forma. (...)”

Se encuentra acreditado que el señor Mario de Jesús Puerta Urrego, confirió poder a los abogados José Bernardo Restrepo Noriega y John Fernando Calderón Gaitán el 15 de noviembre de 2019 a efecto de gestionar en su nombre, el reconocimiento, reliquidación y pago de su asignación de retiro.

De igual forma, se encuentra probado que mediante Radicado No. 518399 de 2 de diciembre de 2019, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacionalm por conducto de la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad dio respuesta al apoderado del señor Héctor Fidel Ramos Herrera bajo el radicado No. 518399 de 2 de diciembre de 2019, quien solicitó

aplicar efectos extensión de jurisprudencia, solicitud negada por la accionada en razón a que el señor Ramos Herrera no cumple con los requisitos del artículo 102 de la Ley 1437 de 2011 y de la Circular 002 del 17 -07-2017 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, mencionando que al peticionario le fue reconocida reajuste de asignación mensual de retiro y en donde queda en evidencia que la entidad no hizo mención alguna a la falta de legitimación en la causa por activa del apoderado para efectuar la petición.

6. Derecho fundamental de petición.

El artículo 23³ de la Constitución Política consagra el derecho fundamental de petición, en virtud del cual todas las personas se encuentran facultadas para presentar peticiones respetuosas ante las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución; se derivan del anterior precepto supralegal los elementos que integran el núcleo esencial del derecho de petición: i) posibilidad de presentar peticiones, ii) obligación correlativa para las autoridades de responderlas en forma oportuna y de fondo, y iii) el deber de dar a conocer la respuesta al peticionario.

La Corte Constitucional en su jurisprudencia ha establecido los siguientes lineamientos generales sobre el derecho fundamental de petición.

“b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido

c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.

Corte Constitucional. T-788 del 12 de noviembre de 2013. M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez; Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 23 de octubre de 2014. C.P.: Bertha Lucia Ramírez de Páez. Rad. No. 25000-23-41-000-2013-02686-01(AC).

Ver sentencias Corte Constitucional T-325 del 3 de mayo del 2012 M.P.: Mauricio González Cuervo, T-129 del 23 de febrero del 2010 M.P.: Juan Carlos Henao Pérez,

Artículo 85. Son de aplicación inmediata los derechos consagrados en los artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37 y 40.

Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.³

(...)"

El núcleo esencial del derecho fundamental de petición cuyo desconocimiento activa la intervención del juez constitucional adoptando las medidas de protección pertinentes, comprende además de la posibilidad de presentar peticiones ante las autoridades públicas y en precisos eventos frente a particulares, el deber de ser resueltas en un término razonable y de fondo, lapso que abarca su notificación al peticionario; no implica, sin embargo, que la decisión deba adoptarse en el sentido de acoger las súplicas de la petición

De esta forma el derecho de petición es el mecanismo idóneo que el constituyente creó a favor de los administrados para que éstos pudieran tener una comunicación directa con los representantes del Estado, de ahí que el mismo se previera no solamente en el ordenamiento constitucional, sino que fue desarrollado mediante la Ley 1755 de 2015, estableciendo como única condición que la petición se elevará en forma respetuosa y a su turno se previó en la ley la obligación de que su derecho fuera respondido en forma oportuna y de fondo.

Lo cual lleva a concluir que una vez el interesado cumple con la exigencia de elevar la petición en forma respetuosa, nace en ese momento el deber y la obligación del Estado de responder la misma dentro de los términos legales y de dar una respuesta de fondo y acorde con lo solicitado.

7. Del caso en concreto

El 15 de noviembre de 2019, bajo el radicado No. 20192-3-19591712 Id. 515190 la parte actora, por conducto de apoderado elevó petición ante el Director General de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, Brigadier General Jorge Alirio Barón Leguizamón, en el que solicitó la extensión de jurisprudencia de fecha 17 de mayo de 2007, dentro del expediente con el radicado No. 25000-23-25-000-2003-08152-01, en consecuencia se efectuara reliquidación y reajuste de asignación de retiro,

petición que al momento de interponer la presente acción constitucional, no había sido resulta por la accionada.

Sin embargo, durante el trámite de la misma, por conducto de la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad accionada, dio respuesta al accionante mediante Oficio No. ID552910 de 16 de marzo de 2020, señalando que en razón a que el poder principal aportado por la firma “*Restrepo Isaza abogado*” corresponde al otorgado por el señor “HECTOR FIDEL RAMOS HERRERA” persona distinta al peticionario, señor MARIO DE JESÚS PUERTA URREGO, dicha solicitud no podía ser tramitada por la entidad, en tanto el profesional del derecho carecía de legitimidad en la causa para efectuar la solicitud elevada.

No obstante lo anterior, tal como se relacionó Enel acáite de pruebas aportadas por la parte actora, se evidencia que mediante Radicado No. 518399 de fecha 2 de diciembre de 2019, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, por conducto de la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad dio respuesta al apoderado del señor Héctor Fidel Ramos Herrera, mismo apoderado del señor Mario de Jesús Puerta Urrego, quien solicitó aplicar los efectos de extensión de jurisprudencia, solicitud negada por la accionada en razón a que el señor Ramos Herrera no cumplía con los requisitos del artículo 102 de la Ley 1437 de 2011 y de la Circular 002 del 17 -07-2017 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, mencionando que al peticionario le fue reconocida reajuste de asignación mensual de retiro.

Ahora bien, de aceptarse los argumentos planteados por la accionada para no dar trámite a la solicitud elevada por el apoderado del aquí accionante, bajo el entendido de que el abogado del señor Mario de Jesús Puerta Urrego aportó con la petición poder conferido por el señor Héctor Fidel Ramos Herrera, razón esta para no darle trámite a su solicitud, no se entiende cómo dicha situación fue pasada por alto por la entidad y contrario a lo evidenciado, si dio respuesta al señor Ramos Herrera desde el pasado mes de diciembre, aunado al hecho de proferir respuesta en dicho sentido transcurridos alrededor de cuatro meses de presentada la solicitud.

Por otro lado, según manifestaciones efectuadas por la parte actora en su escrito de impugnación, se advierte que el apoderado del aquí accionante una vez se acercó a las instalaciones de la entidad accionada a efectos de solicitar la verificación de las carpetas correspondientes a los señores Mario de Jesús Puerta Urrego y Héctor Fidel Ramos Herrera, encontró que el poder otorgado por el señor Puerta Urrego se encontraba en la carpeta del señor Ramos Herrera y viceversa.

En virtud de lo anterior, para esta Sala no existe justificación alguna para que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional no proceda a emitir un pronunciamiento de fondo, frente a la solicitud elevada por la parte actora desde el pasado 15 de noviembre de 2019 bajo el radicado No. 20192-3-19591712 Id. 515190 evidenciando con ello que en la actualidad persiste la vulneración del derecho de petición deprecado por la parte actora, razón por la cual el mismo debe ser amparado.

En consecuencia, esta sala revocará la decisión adoptada por el Juzgado 64 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Tercera, quien mediante sentencia del 17 de marzo de 2020, declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, y en su lugar dispondrá el amparo del derecho fundamental de petición del señor Mario de Jesús Puerta Urrego, ordenando al Director General de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, Brigadier General Jorge Alirio Barón Leguizamón y a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica Claudia Cecilia Chauta Rodríguez que en el término de tres (03) días, siguientes a la notificación del presente proveído, procedan a dar respuesta a la petición elevada el 15 de noviembre de 2019 bajo el radicado 20192-3-19591712 Id. 515190, respuesta que deberá ser notificada a la dirección aportada en el escrito petitorio, esto es: Calle 12 No. 5-32 Edificio Corkidi, Oficina 17-01, o al correo electrónico restrepoisaza.abogados@gmail.com.

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B**, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 17 de marzo de 2020, proferida por el Juzgado 64 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, que declaró la carencia actual de objeto por hecho superado. En su lugar, **AMPARAR** el derecho fundamental de petición de Mario de Jesús Puerta Urrego

SEGUNDO: ORDENAR al Director General de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, Brigadier General Jorge Alirio Barón Leguizamón y a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica Claudia Cecilia Chauta Rodríguez, para que en el término de tres (03) días, siguientes a la notificación del presente proveído, procedan a dar respuesta a la petición elevada el 15 de noviembre de 2019 bajo el radicado 20192-3-19591712 Id. 515190, respuesta que deberá ser notificada a la dirección aportada en el escrito petitorio, esto es: Calle 12 No. 5-32 Edificio Corkidi, Oficina 17-01, o al correo electrónico restrepoisaza.abogados@gmail.com.

TERCERO: COMUNICAR esta decisión a las partes y al Procurador delegado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que corresponda.

CUARTO: ENVIAR el expediente de la referencia a la Corte Constitucional vencido dicho término para su eventual revisión conforme a lo dispuesto por el inciso 2º del artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Proyecto discutido y aprobado en Sala N° 16 del 29 de abril de 2020.


HENRY ALDEMAR BARRETO MOGOLLÓN
Magistrado


FRANKLIN PÉREZ CAMARGO
Magistrado


OLGA CECILIA HENAO MARÍN
Magistrada